

Representación política y "contra/democracia"

POR ISIDORO CHERESKY

ISIDORO CHERESKY ES DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES POR LA UNIVERSIDAD DE TOULOUSE LE MIRAIL Y LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. SE DESEMPEÑA COMO PROFESOR TITULAR DE TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA EN LA UBA, Y COMO INVESTIGADOR DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICET) EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI (UBA). ES ADEMÁS CONSULTOR EN GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). HA PUBLICADO COMO AUTOR Y COMPILADOR VARIOS LIBROS EN TEMAS DE DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA, SIENDO LOS MÁS RECIENTES *CIUDADANÍA, SOCIEDAD CIVIL Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA* (2006), *LA POLÍTICA DESPUÉS DE LOS PARTIDOS* (2006), *ELECCIONES PRESIDENCIALES Y GIRO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA* (2007) Y *PODER PRESIDENCIAL, OPINIÓN PÚBLICA Y EXCLUSIÓN SOCIAL* (2008). ES AUTOR, ADEMÁS, DE NUMEROSOS ARTÍCULOS INCLUIDOS EN COMPILACIONES Y PUBLICACIONES EN REVISTAS ESPECIALIZADAS NACIONALES E INTERNACIONALES. HA SIDO PROFESOR E INVESTIGADOR INVITADO EN DIVERSAS CASAS DE ESTUDIOS, COMO LAS UNIVERSIDADES DE AMSTERDAM, STANFORD, NOTRE DAME, LAVAL, NEW SCHOOL UNIVERSITY Y SORBONNE NOUVELLE.



La vida política ha experimentado transformaciones significativas en las sociedades contemporáneas y particularmente en América Latina. Hace ya dos décadas, Bernard Manin argumentó que asistíamos a una transición de la “democracia de partidos”, que habría sido típica en el siglo XX, a una “democracia de audiencia” (que llamó luego “de lo público”), característica de nuestro tiempo, con mayor libertad de los líderes políticos en la búsqueda de líneas de diferenciación política, las cuales ya no provendrían “naturalmente” de la conflictividad social. Pierre Rosanvallon, en *La Contrademocracia* y en *La legitimidad democrática*, desarrolló un diagnóstico según el cual se estaría produciendo una transición de un régimen con predominio del sistema representativo a otro de coexistencia del mismo con una institucionalidad formal e informal –alimentada por la desconfianza ciudadana en los gobernantes– que relativizaría y hasta contrarrestaría la legitimidad electoral. Se requeriría para gobernar atender a una ciudadanía activada por otras legitimidades y representaciones. En otras palabras, la consagración de gobernantes en el acto electoral sería un momento, necesario pero insuficiente, de una democracia continua en la que la ciudadanía no deja de pronunciarse y fluctúa en sus alineamientos.

Continuar una indagación en la línea apuntada requiere examinar algunos conceptos de referencia del régimen político (representación, deliberación, participación).

En el período más reciente se han presentado una diversidad de situaciones en América Latina: transiciones a la democracia que han sido prolongadas y problemáticas (particularmente en México y Chile), emergencia de regímenes fundacionales (en Bolivia, Venezuela y Ecuador), y en otros casos la vida política ha transcurrido por canales inusuales y renovados (aun en Uruguay la desarticulación del bipartidismo que llevaba sus años ha sido una gran novedad). Los recursos de la política y los liderazgos (las elites políticas) son considerablemente diferentes a las del pasado. Términos acuñados en contextos generales a los que hemos aludido precedentemente como “democracia de lo público” o coexistencia de representación y “contrademocracia” han sido entonces empleados en la región para definir lo que es considerado una verdadera mutación democrática.

En el contexto latinoamericano, con frecuencia, se considera a los regímenes políticos imperantes como “democracias electorales”. Pese a que en muchos casos se registran deficiencias, de significación variable, en los comicios (las presidenciales de 2006 en México), o en la legislación que los regula (Venezuela, con la distribución muy desigual de los legisladores por distritos; Chile, con el sistema binominal de atribución de bancas de diputados) se reconoce que las elecciones son las que instalan gobernantes legítimos (en los países de la región no hay otros en el poder que aquellos consagrados en las urnas). E incluso son el recurso para dilucidar crisis y encaminar el antagonismo con un mínimo en ▶



MARTÍN SCHIAPPACASSE

- cuadro de pacificación social. Pero esa referencia se asocia, desde ópticas diversas, a su descalificación, pues se la considera un estadio de “democracia elemental”. Esta perspectiva apunta a poner de relieve que el resultado electoral puede habilitar el ejercicio de un poder presidencial concentrado y desconocedor de las restricciones institucionales, dado que con frecuencia en estas sociedades el marco republicano (la división de poderes, los órganos públicos de auditoría, irrestrictas libertades públicas y la legalidad en general) es débil. Puede ser, en ese contexto, que se coarten las libertades públicas al menos en la modalidad hasta entonces existente y que el líder/presidente y su entorno procuren eternizarse en el poder valiéndose de los recursos que les da el control del aparato de Estado.

Puede objetarse a esa perspectiva una generalización apresurada que asocie la democracia electoral con la culminación de proyectos hegemónicos en el monopolio *sine die* de poder, porque aunque en muchos casos estas democracias presentan déficits institucionales, continúan, sin embargo, siendo competitivas.

Lo cierto es que los proyectos que ambicionan perpetuarse en el poder son el resultado de procesos electorales efectivos y en tanto esta característica se mantenga, el eternizarse en el poder, encarnándolo en un movimiento o en un líder, se mantiene como pretensión. Los ciudadanos, los electores convalidan el ejercicio del poder y con frecuencia, en el caso de los regímenes de pretensión fundacional, con apoyos muy significativos.

En varios de los regímenes existentes –fundacionales o no fundacionales– en paralelo a la declinación de la institucionalidad tradicional se ha expandido una movilización de nuevas características (en algunos casos en el registro “popular” más conocido y en otras con modalidades “ciudadanas” inéditas) y aun una institucionalidad informal.

De modo que las “democracias electorales” en sus diversas variantes no deberían ser consideradas simplemente como democracias incompletas, evaluadas así, tomando como unidad de medida el paradigma clásico de democracia. Esta óptica del “desvío” de las democracias de la senda institucional subraya falencias ciertas referidas a que los viejos regímenes que se resquebrajan habilitan con frecuencia escenas políticas donde se burlan las leyes y las

Constituciones, pero esa óptica no percibe los cambios sociales y culturales que han modificado radicalmente la vida política y particularmente la relación de los ciudadanos con los gobiernos y los Estados. De modo que ese análisis político tradicional interpreta el presente como si los “desvíos” actuales fueran a ser superados por un encarrilamiento que conduciría a los canales institucionales clásicos, que si bien fueron infrecuentes en América Latina eran el modelo que proveían las democracias del hemisferio norte y los manuales de ciencia política.

Se puede considerar, sin embargo, que las transformaciones –la “mutación democrática” a la que asistimos, no en sus derivaciones circunstanciales, sino en sus condicionamientos históricos y sociales– es irreversible. Si así fuese el desafío, no habría que juzgar cuan conforme a la tradición es la evolución actual, sino identificar la posible evolución futura de la descomposición del sistema representativo. Para que ello sea posible conviene advertir que este cambio de época se registra también en los países de tradicionales democracias maduras así como en las sociedades que emprenden su democratización (como las de parte del mundo árabe), pero bajo modalidades inéditas. La descomposición del sistema representativo tradicional y la emergencia de formas más efímeras de representación electoral y no electoral, e incluso de autorrepresentación y una sociabilidad posibilitada por las nuevas tecnologías de comunicación bastante sustraída a las posiciones en el mundo del trabajo, parecen ser rasgos comunes, con características variables, de la referida mutación en las diferentes latitudes.

En síntesis, para abrir los ojos a lo que sucede debería ser posible no identificar a la democracia con un momento de su historia ni con un dispositivo institucional particular. Ello no quiere decir que la mentada mutación democrática sea una creación *ex nihilo* y no se reconozcan continuidades.

ES CADA VEZ MENOS FRECUENTE QUE LA POSTULACIÓN PARA LAS RESPONSABILIDADES EJECUTIVAS SE ACOMPAÑE DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO, E INCLUSO CUANDO ELLO SUCEDE TIENE POCAS IMPLICANCIAS PARA LA ULTERIOR RELACIÓN GOBERNANTES/GOBERNADOS.

LA ELECCIÓN, PARA CONSAGRAR GOBERNANTES LEGALES

1. El electoralismo se ha extendido en América Latina, no sólo en el ámbito de la representación política, sino también en la vida asociativa, gremial y aun en las protestas *ad hoc*. Es la reafirmación de un principio de igualdad ciudadana que se encuentra por doquier.

Pero en el ámbito específicamente político la vigencia de las elecciones -a veces atenuada por la desafección ciudadana traducida en abstencionismo- reviste un carácter paradójico. Las elecciones dan sustento a un gobierno reconocido y son también la oportunidad, a veces, para dirimir rumbos políticos, pacíficamente, en contextos antagónicos o de crisis. Pero su alcance se ha limitado a atribuir legalidad a los gobernantes. Es cada vez menos frecuente que la postulación para las responsabilidades ejecutivas se acompañe de un programa de gobierno, e incluso cuando ello sucede tiene pocas implicancias para la ulterior relación gobernantes/gobernados. Las propias circunstancias cambiantes obligan a los gobernantes a redefinir rumbos y con frecuencia a archivar promesas. De modo que el voto es una opción en una escena en que se eligen gobernantes entre ofertas que aspiran a ganar la confianza y en la que algunos, o muchos, con frecuencia optan por efecto de negatividad (se vota la alternativa a un adversario o el castigo a una acción de gobierno). Entonces, en los tiempos presentes parecen revalidarse las teorías de los pensadores elitistas.

Este debilitamiento del mandato o del voto programático puede estar acompañado de un sentido consistente. Es lo que sucede con el pronunciamiento ciudadano en el inicio de los ciclos en que se han presentado alternativas generales de rumbo político: la coalición antidictatorial (la Concertación en Chile luego de que Pinochet perdiera el plebiscito), la salida de una crisis profunda (la Argentina luego de la debacle 2001/2002), la alternativa crítica que encarna el derrumbe de un sistema político (Venezuela, Bolivia o Ecuador luego del fracaso de sus democracias limitadas). Sin embargo, aun en esos casos, el voto ha tenido un componente variable de negatividad y eventualmente el apoyo a un rumbo genérico más que a un programa de gobierno.

Aunque las elecciones consagran gobernantes legítimos o más estrechamente investidos de una legalidad que no es puesta en duda, las decisiones de gobierno más significativas, las que se sitúan en el centro de la agenda pública, requieren de una legitimidad específica. Del voto no se deriva una lealtad con los representantes que vaya a sostener cada

una de sus decisiones. Debe entenderse que la legalidad de los gobernantes sólo es puesta en cuestión en situación de crisis extrema y ello es infrecuente (con la importante salvedad de los gobernantes que han debido dejar el poder por la desafección ciudadana: en Brasil, Collor de Melo; en Bolivia, Sánchez de Lozada; en Perú, Fujimori; en Ecuador, Bucaram y Gutiérrez; en la Argentina, De la Rúa). Una disociación de la legitimidad de los actos de gobierno que son motivo de un pronunciamiento ciudadano, implícito o explícito en cada caso, tal como se ha visto con los vetos ciudadanos en los años recientes. Por ejemplo, en Bolivia con el reajuste de precios de los hidrocarburos; en la Argentina con el incremento de los gravámenes a las exportaciones agropecuarias; en Chile, con el sistema de transporte Transantiago y luego con las reformas educativas.

En términos generales, puede constatarse un desplazamiento en los atributos de los gobernantes. A la vez que se refuerza la tendencia a la concentración del poder en el líder/presidente y su libertad de acción, se han vigorizado instituciones preexistentes, o recientemente creadas, que asumen funciones de control o de veto y cuya "función representativa" se deriva de la pretensión de imparcialidad de la que están investidas y del reconocimiento ciudadano a ese desempeño. Estas autoridades tienen pertinencia para el respeto de las reglas de juego (electorales y de competencia política u otras), en la protección de derechos (Cortes constitucionales o comisiones sobre una variedad de derechos, desde los ambientales hasta los de salud) o en el ámbito de la preservación de la verosimilitud pública (diferentes ONGs, medios de comunicación u otras instituciones que denuncian o llaman la atención de la opinión pública sobre la información que circula).

De modo que junto a la representación que surge de una voluntad mayoritaria expresada en las urnas, se despliegan instituciones de representación, legales unas, informales otras, que actúan en nombre de una imparcialidad que procura preservar los principios generales constitutivos de la comunidad política (los derechos, la vigencia de principios constitucionales o su interpretación ampliatoria), satisfaciendo una aspiración de consenso, presente en las sociedades democráticas a la par del reconocimiento a la irreductible adversatividad política, aspiración que se reaviva cuando la institucionalidad representativa tradicional se ha debilitado o resquebrajado (partidos políticos, Congreso).

DEL VOTO NO SE DERIVA UNA LEALTAD CON LOS REPRESENTANTES QUE VAYA A SOSTENER CADA UNA DE SUS DECISIONES.

- ▶ **2.** Precisamente, otra paradoja es que en tanto las elecciones marcan la vida pública, los principales recursos del dispositivo de la representación se hallan debilitados o desarticulados. Es decir, que con frecuencia, a la hora de la renovación periódica de los representantes no se registra una continuidad ni en las identidades políticas partidarias ni en las alianzas o alineamientos ciudadanos. La competencia política que en el pasado tenía como referente al sistema de partidos, en muchos casos no lo tiene más y aun en donde persiste cierta continuidad institucionalidad, ésta se halla jaqueada o desequilibrada por las identidades emergentes (en las últimas elecciones presidenciales en Chile con la candidaturas de Enríquez Ominami y Arrate; en Colombia, con la de Mockus).

Los liderazgos de popularidad emergentes, a nivel nacional pero también provincial o distrital, dan la tónica de un proceso de reconfiguración de identidades de tipo personalista. Estos líderes son instituyentes: ya sea porque suscitan un lazo representativo para competir electoralmente, o a veces porque luego de acceder al poder reformulan ese lazo representativo sobre bases diferentes (Kirchner en la Argentina, quizás Rousseff en Brasil y Bachelet en Chile en sus primeros tiempos). En todo caso los liderazgos son cada vez más los depositarios de la iniciativa política y los que configuran las alianzas y la oferta electoral. Los partidos, o con frecuencia, lo que queda de ellos (las redes territoriales) son un recurso necesario, pero subordinado. No son los que fijan la agenda pública, ni los recursos principales para la comunicación política (aunque esta afirmación no es igualmente válida para las grandes ciudades que para los pequeños poblados). La red te-

EL CARÁCTER CADA VEZ MENOS PROGRAMÁTICO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES HACE QUE LAS DISPUTAS ESTÉN MUY RELACIONADAS CON LA ACCIÓN DEL GOBIERNO SALIENTE O DE LA COALICIÓN GOBERNANTE, PARA SOSTENERLA O PARA BUSCAR SU DESPLAZAMIENTO.

rritorial ha disminuido su significación, pero aún la mantiene para animar “en vivo” la campaña electoral, para fiscalizar los actos electorales (según el sistema de votación vigente) y sin duda para gobernar.

Puede argüirse que las tradiciones políticas siguen de algún modo vigentes y que la institución de nuevos vínculos representativos no es una pura creación *ex nihilo*, pero ellas ya no están identificadas o monopolizadas por una organización o un líder. Cuando guardan vigencia son objeto de disputa y apropiación por unos y otros y aun así, para crecientes sectores ciudadanos, los sentidos polémicos del presente tienen primacía por sobre los heredados.

De modo que en esa tendencia –por cierto variable, según los casos nacionales– la proximidad de las elecciones inaugura un tiempo de constitución de identidades o más modestamente de formación de coaliciones electorales. En muchos casos, en vísperas electorales emergen o continúan líderes que tienen o adquieren la capacidad de construir un vínculo representativo y competir. La competencia más desligada de sostenes territoriales y partidarios es la nacional –aunque no desligada de condicionamientos por parte de los poderes fácticos–, y la puja más ilustrativa de los nuevos tiempos es la presidencial.

Dadas las condiciones de desinstitucionalización mencionadas, en el escenario preelectoral se configuran identidades y coaliciones en torno a los líderes de popularidad, quienes pueden articular porque son locomotoras electorales. La intervención de esos líderes puede proponerse incidir en la consagración de su sucesor (tal es el caso de Lula da Silva al promover activamente la candidatura de Vilma Rousseff) o en condicionar las elecciones locales. Se ha subrayado que la débil identificación, o incluso la desidentificación de los ciudadanos con las fuerzas políticas existentes en cada escena, posibilita la fluctuación en los alineamientos al constituirse la oferta política cuando se aproximan las fechas electorales. No obstante, la contrapartida del ciudadano independiente es cada vez más la fluctuación del propio personal político. Sin que se pueda todavía hacer referencia a una clase política única que se redistribuiría periódicamente, sí puede indicarse que los criterios pragmáticos de alineamiento con tal o cual fuerza política (y, para quienes pueden, el crear una nueva etiqueta política), prevalecen por sobre las historias personales y organizacionales y sobre las identificaciones ideológicas. Y ello es cada vez más cierto incluso en aquellas escenas políticas polarizadas.

El carácter cada vez menos programático de las campañas electorales hace que las disputas estén muy relacionadas con la acción del gobierno saliente o de la coalición gobernante, para sostenerla o para buscar su desplazamiento (es notoria la disociación entre la valoración electoral de la acción del gobernante y la de su fuerza política en el caso de Chile, en donde la popularidad de Bachelet estaba disociada de la de la Concertación). En consecuencia,

LA DENUNCIA DE LAS CORPORACIONES, DEL CAPITALISMO, DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS O DE LOS MONOPOLIOS QUE CONTROLAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROCURA COLOCAR A LOS GOBIERNOS EN UN ANTAGONISMO ANTE LOS PODERES MENCIONADOS.

la novedad de la identidad suele venir por el lado de las oposiciones o de las disidencias (Mockus en Colombia; Piñera y Enríquez Ominami en Chile; López Obrador en México). Con frecuencia, se invocan en el lenguaje político partidario las nuevas condiciones de la política con el afán de conquistar las simpatías del electorado: la renovación dirigencial, la democracia ciudadana.

Por sobre todo, cada vez más los candidatos procuran devenir líderes populares actuando con una lógica de proximidad, creando redes alternativas a las partidarias y promoviendo prácticas de contacto directo de tipo identificatorio.

3. De modo que las campañas electorales cuentan. En su transcurso se constituye una escena y suelen configurarse capitales políticos inesperados. Ya no se puede dar por suficiente un voto identitario o cautivo para triunfar. Por el contrario con frecuencia la campaña puede revertir las expectativas iniciales. Ha sido el caso de varios candidatos que al comienzo de las campañas eran líderes en las encuestas y luego fueron derrotados: Toledo en Perú, Serra en Brasil, López Obrador en México.

Se configuran coaliciones en torno a los líderes de popularidad en pugna, que son los verdaderos referentes de la escena electoral. Estas coaliciones pueden ser formalizadas en compromisos (el caso de Humala en Perú entre la primera y segunda vuelta), pero también pueden ser solamente aparentes, es decir, en verdad actos de cooptación o alianzas de

LAS CAMPAÑAS ELECTORALES CUENTAN. EN SU TRASCURSO SE CONSTITUYE UNA ESCENA Y SUELEN CONFIGURARSE CAPITALES POLÍTICOS INESPERADOS. YA NO SE PUEDE DAR POR SUFICIENTE UN VOTO IDENTITARIO O CAUTIVO PARA TRIUNFAR.

facto, obra del poder vertical del líder que incorpora o excluye aliados sin mediar acuerdos formales o institucionales.

Como se señaló, divisoria de aguas entre oficialistas y opositores se deriva de la evaluación de la gestión de gobierno, pero en los “regímenes fundacionales” puede intentarse o producirse efectivamente un desplazamiento: quienes gobiernan alegan no detentar el poder o estar en disputa por él con los poderes fácticos. La denuncia de las corporaciones, del capitalismo, del mundo de los negocios o de los monopolios que controlan los medios de comunicación, procura colocar a los gobiernos (sea la revolución ciudadana, la democracia participativa, el socialismo del siglo XXI o la nación multiétnica) en un antagonismo ante los poderes mencionados. Si esa escena se instala, si se hace verosímil, las oposiciones políticas, cuando son de “derecha”, son tildadas de aliados de los poderes fácticos, y si son de “izquierda”, son calificadas de instrumentos de los poderosos que debilitan la contradicción principal.

Esta polarización, en donde se han producido reformas sociales o han irrumpido nuevos actores populares en la escena pública, pretende reducir la representación a los dos campos “estructurales” u “objetivos”, uno de los cuales está connotado como tributario de la injusticia y eventualmente destinado a desaparecer. La representación del pueblo o de la ciudadanía frente a los poderes fácticos procura simplificar la vida política: la representación ya no es múltiple y construida y reconstruida en la competencia política —donde las identidades nacen y mueren en tanto que ciertos principios generales como la libertad, la igualdad, la justicia social son objeto de permanente reformulación en su adecuación al presente. Y, en consecuencia, no se reconocen como legítimas las restricciones al ejercicio absoluto de la pretendida voluntad popular. Los poderes de imparcialidad (en particular las Cortes Constitucionales) o los mediáticos son ignorados o imputados por su pretendido —y a veces real— alineamiento con el campo de los poderes fácticos que quieren detener las reformas. Existe con todo un límite que ha sido operante hasta ahora en preservar la competencia y evitar la encarnación de los principios en actores políticos específicos: el pronunciamiento electoral ciudadano.

Sin embargo, puede registrarse el sesgo particular de la lucha política en el escenario descripto. El polo fundacional pretende ser la encarnación de principios transformadores, el modo de ejercicio del poder es conforme a la encarnación: poco deliberativo y muy decisionista. El polo “crítico” suele ser una amalgama entre sectores democráticos hostiles al arrasamiento institucional y al autoritarismo, y sectores hostiles a las reformas sociales y a la ampliación democrática que conllevan. Con frecuencia estos últimos son los más activos y pueden dar la tónica de la oposición al proyecto fundacional, que justifique la interpretación que hace hincapié en la naturaleza social de la confrontación en detrimento de su carácter político y democrático. ▶

► LA “CONTRADEMOCRACIA”: DE LA REPRESENTACIÓN TRADICIONAL A LA DEMOCRACIA CONTINUA

En las democracias de América Latina, como en muchas de las del hemisferio occidental y aun en otros territorios (el mundo árabe recientemente), la mutación democrática ha significado una ampliación y desplazamiento del eje de la vida política. La expresión de la voluntad popular o ciudadana por medio de la representación ha sido relativizada por la expansión de los “poderes indirectos” (Rosanvallon). Es decir, que se han instalado otras legitimidades que relativizan el mandato atribuido por la mayoría electoral, y que apuntan a proteger el derecho de todos, a asegurar la contemplación de los reclamos en un mundo de diversidad y a prestar atención a las particularidades emergentes. Puede concebirse de este modo una democracia continua: la ciudadanía no es tan sólo electorado y el poder no está concentrado en los representantes; la expresión ciudadana (pasiva o activa) va más allá del acto electoral. La representación ejercida por los organismos de control verosímiles para los ciudadanos, las autoridades investidas de autoridad moral, los observatorios y otras instituciones que argumentan sobre iniciativas y decisiones, así como simplemente las encuestas de opinión o las formas de autorrepresentación por medio de protestas, configuran un segundo polo de la vida política que tiene un carácter permanente aunque algunas de sus expresiones sean episódicas.

Esta proliferación de instituciones y de grupos emergentes, verdadera fragmentación del mundo sociopolítico, ha justificado la relativización de la referencia al pueblo como sujeto eventual y aun como ideal de unificación de una voluntad común. Y ha derivado en nombrar a los individuos de las sociedades contemporáneas en términos de ciudadanía (individuos, tributarios de derechos que fluctúan en sus adhesiones asociativas y en sus identificaciones políticas) y de minorías (que corresponden a grupos específicos que requieren palear carencias en la atención social, o reconocimiento en vistas a su inclusión explícita en el universo de los iguales).

Ya al considerar el sistema representativo se ha mencionado el debilitamiento o extinción de los partidos y de las identificaciones que les daban una argamasa de leales o representados, y la expansión en su lugar de redes en que los referentes tienen poca capacidad disciplinadora y tienden más bien a reflejar las fluctuaciones de su micro mundo de clientes o adherentes en las articulaciones coalicionales en las que se inscriben. Los líderes de popularidad que emergen, instituyentes, son la contracara de la ciudadanía compuesta por individuos y minorías. En la política, en consecuencia, la ilustración de esa nueva sociabilidad la provee la centralidad de los liderazgos y la conformación en torno a ellos de coaliciones o alianzas. En términos más generales podemos decir que coexisten formas partidarias, con liderazgos que tienen con frecuencia una centralidad

superior a las estructuras organizacionales y una configuración más abarcadora, sobre todo ahí donde el sistema de partidos sufrió una severa crisis de movimientos en los que convergen diferentes sensibilidades, tradiciones e intereses en torno a una acción emprendida por el líder (los casos de los oficialismos boliviano y argentino son particularmente ilustrativos).

Las masas “encuadradas” del pasado tienen una cierta continuidad en las redes de asistidos de los sectores más carenciados que a veces permanecen disciplinados, y en las identidades comunitaristas. Pero lo que emerge con fuerza en el espacio público son los actores más espontáneos e informales de intensidad política. La nueva militancia juvenil que se autoconvoca por las redes sociales de Internet o por la telefonía celular. La intensidad política, la visibilidad en las plazas y calles o en el cyberespacio bajo esta nueva modalidad, ha cobrado un gran relieve en la vida pública.

Estos nuevos actores emergen en paralelo a un resquebrajamiento del mundo corporativo y asociativo más tradicional. Los sindicatos también se desagregan y la disciplina de los líderes patriarcales o electos está sometida a la deliberación de asambleas de los movilizados en los conflictos o a la disidencia de sectores de actividad disconformes.

Se registra una diversidad de movilizaciones, pero lo más notorio es la coexistencia de dos calles o dos presencias sensibles: por una parte, la popular de reclamos en términos de necesidades usualmente con epicentro en los excluidos y motorizadas por el activismo social y, por otra parte, la ciudadana, la de las clases medias urbanas —más espontánea y frecuentemente de veto— que a veces reclama en forma convergente y, otras veces, fragmentada.

El veto o rechazo a ciertas decisiones de gobierno y el estallido, cuando se trata de un descontento general, pueden abarcar a unos y otros; pero debe considerarse que los sectores medios juveniles, urbanos y profesionales, se han convertido en los actores más innovadores y “amenazantes”. Pero no por sus modos de expresión, generalmente pacíficos, del espacio público ni probablemente en virtud de su condición social en el sentido tradicional, sino porque están más incluidos en los circuitos de comunicación política, más informados y en cierto sentido han adquirido autonomía respecto de las restricciones propias de todo anclaje social.

LO QUE EMERGE CON FUERZA EN EL ESPACIO PÚBLICO SON LOS ACTORES MÁS ESPONTÁNEOS E INFORMALES DE INTENSIDAD POLÍTICA. LA NUEVA MILITANCIA JUVENIL QUE SE AUTOCONVOCA POR LAS REDES SOCIALES DE INTERNET O POR LA TELEFONÍA CELULAR.

LOS EXCLUÍDOS, COMO HA SIDO EL CASO DE LOS PIQUETEROS Y DE OTRAS DENOMINACIONES DE LA POBREZA Y DE LA EXCLUSIÓN, SE CONSTITUYEN EN EL ESPACIO PÚBLICO POR MEDIO DEL BLOQUEO Y EL CORTE DE RUTA.

Un cambio que merece atención (cosa que excede estas líneas) es la gran transformación sociológica propiciada por la vertiginosa expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, algunas ya tradicionales como la televisión y otras más recientes como la telefonía celular, sobre todo Internet y las redes sociales.

Esta transformación tecnológica favorece un nuevo tejido de relaciones sociales, las de vínculos de un espacio público sostenido en los medios de comunicación. Como se ha indicado, surgen nuevos actores en las redes sociales y en los blogs.

Los excluidos, como ha sido el caso de los piqueteros y de otras denominaciones de la pobreza y la exclusión, se constituyen en el espacio público por medio del bloqueo y el corte de ruta. Ahí, en esa acción que interfiere la "normalidad de la circulación" y que resuena por la difusión que le dan los medios de comunicación, cobran existencia los piqueteros y otras identidades que revelan un reclamo social pero que, con frecuencia, no provienen de ninguna localización o condición social homogénea sino que son aglutinados por la propia acción de reclamo o protesta.

El impacto de estas acciones, ejecutadas a veces por pequeños grupos, no repercute tan sólo ni principalmente en quienes presencian la acción disruptiva y resultan afectados. Es sobre todo el espacio televisivo, radial y la prensa gráfica que les da visibilidad nacional e internacional y de ese modo las demandas y la identidad novedosa se alojan en la agenda pública.

En resumen, perturbación funcional (de la circulación de personas y de provisiones) pero sobre todo visibilidad, sensibilización de una "opinión ciudadana" que no los conocía¹.

Otros sectores más heterogéneos, espontáneos y probablemente con sede en las capas medias urbanas, comunicados por Internet, emergen y se instalan en otro espacio público. Expresan con frecuencia más un veto, o un descontento o una denuncia, que una demanda específica. Estos nuevos cybersujetos, con presencia visible ocasional cuando se reúnen y manifiestan, constituyen una trama de igualdad e intensidad subjetiva. Con su expansión se produce un significativo desplazamiento en la comunicación política, al menos para un sector más juvenil de la sociedad. En el ámbito público virtual que se genera rige un principio

que coloca a cada uno de los integrantes en pie de igualdad; parecería que se alcanza de ese modo un ideal de libertad y espontaneidad deliberativa, pese a que en verdad las jerarquías y reconocimiento de la sociabilidad habitual continúan siendo operantes. Sin embargo, lo que ocurre en este ámbito es novedoso. La relatividad de la opinión tiende a adquirir un rango de verdad, pues, lo que se emite esta avalado por la intensidad subjetiva (como dice Sarlo en *La audacia y el cálculo*). De modo que una lógica de autenticidad se impone naciendo de rumores, impresiones y conjeturas, certezas que animan la cohesión de grupos que pueden devenir actuantes. De modo que un espacio fuera de toda regulación es propenso a recoger el descontento ciudadano característico de nuestro tiempo (Rosanvallon) favoreciendo la amplia libertad de expresión, pero también convalidando certezas, hilvanando la trama de teorías conspirativas, etcétera.

Esta nueva sociabilidad en expansión encierra en consecuencia una promesa de libertad y una amenaza de arbitrariedad. Cuando la diversidad de opiniones individuales y grupales deviene una certeza mayoritaria o colectiva con más sustento emocional que argumentativo, se perfila una forma de clausura del espacio público con el predominio de una forma novedosa de "la masa" como figura opuesta a la ciudadanía deliberativa.

Se esboza así la evolución hacia un espacio sin contorno ni epicentro con redes múltiples en donde predomina la autorrepresentación aunque se puede reconocer en las redes la diferencia entre emisores privilegiados y seguidores (ambos probablemente transitorios).

Como se ha señalado el espacio público descrito constituye un desafío para el futuro democrático. Puede acentuar la fragmentación ciudadana y recoger la negatividad (veto), todo ello en desmedro de una comunidad política que se reconozca en dilemas o alternativas comunes. Es decir, puede prevalecer una expresividad generalizada que no vaya más allá de sí misma, que se fije como impolítica. No es inevitable que ello suceda. Una evolución que dé productividad democrática a esta ampliación de sus principios constitutivos (libertad e igualdad) pueden sobrellevar las "falencias de la espontaneidad", si la diversidad apuntada alterna con instituciones formales e informales acreditadas por la verosimilitud de sus informaciones y por la posibilidad que procuren algún ordenamiento de los debates y algún encaminamiento de lo que haya de reclamos hacia canales normativos y legislativos. Asimismo, la vida política no puede prosperar si sólo impera la espontaneidad y la fragmentación, los actores que deberían alentar el debate estratégico están debilitados y deberían reconstituirse en consonancia con la realidad de nuestro tiempo. •

Nota

¹ Estas prácticas de protesta disruptiva se han extendido a otros grupos sociales que juzgan su acceso habitual al espacio público insuficiente. Aumenta la tentación de acudir a ellas como modo de hacerse oír.